REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
DISTRITO JUDICIAL DE VALLEDUPAR
JUZGADO PRIMERO PROMISCUO MUNICIPAL
AGUSTÍN CODAZZI – CESAR
J01prmpalcodazzi@cendoj.ramajudicial.gov.co
Calle 18 No. 13-07 Barrio Machíquez. Teléfono 095-5766077

Agustín Codazzi – Cesar, Febrero Veinticinco (25) de Dos Mil Veintiuno (2.021).

REF: Acción de Tutela promovida por GERMAN DAVID RAMÍREZ ZULETA en contra de la SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE AGUSTÍN CODAZZI – CESAR Y EL MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI-CESAR.

Radicación No.: **200134089001-2021-00028-00**

ASUNTO A TRATAR

Aborda el Despacho la labor de adoptar la decisión de fondo que en derecho corresponda, dentro de la presente Acción de Tutela promovida por el señor GERMAN DAVID RAMÍREZ ZULETA, en contra de la SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE AGUSTÍN CODAZZI, CESAR, habiéndose vinculado a la misma, también en calidad de accionado, al MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI-CESAR, en defensa de sus Derechos Fundamentales de Petición, y Debido Proceso, consagrados en los artículos 23 y 29 de la Constitución Política, para lo cual se tienen en cuenta los siguientes.....

ANTECEDENTES

Correspondió a este despacho, por reparto, la presente acción de tutela promovida por el Señor GERMAN DAVID RAMÍREZ ZULETA en contra de LA SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE AGUSTÍN CODAZZI – CESAR, habiéndose vinculado a la misma, también en calidad de accionado, al MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI-CESAR, en defensa de sus Derechos Fundamentales de Petición, en virtud de ello solicita que se le ordene a la accionada, lo siguiente: **a).** _ Que en el término de Cuarenta y ocho (48) horas, contado a partir de la notificación de la sentencia produzca la corrección de la vulneración o acto pretermitido. **b).** _ Que una vez se produzca la decisión definitiva en el asunto en cuestión, remita a este despacho copia del acto administrativo n las formalidades de ley o que, consultado el Simit, esté dado de baja el comparendo en cuestión, el cual no cumple con lo establecido tanto en la Sentencia C-038 de 2020, ni en la Ley 1843 de 2017, so pena de las sanciones de ley por desacato. **c).** _ Que se sirva hacer efectivo el descargar de la plataforma Simit, del comparendo mencionado, ya que la Sentencia C-038 de 2020 declaró inexecutable el Parágrafo 1 del Artículo 8 de la Ley 1843 de 2017, por lo tanto, la accionada, Secretaría de Tránsito y Transporte de Agustín Codazzi, tiene la obligación legal de respetar [el debido proceso], en todas sus actuaciones administrativas. **d).** _ Que la Secretaria de Tránsito y Transporte de Agustín Codazzi-Cesar o quien haga sus veces de contestación de fondo a su derecho de petición y le sean allegados los documentos, soportes y demás certificaciones que solicitó y que están expresas en el derecho de petición adjunto a la presente, y que en caso no contar con ello se le certifique por medio de oficio firmado por dicho funcionario.

Los hechos en los que la accionante finca su solicitud, los podemos enunciar así:

- Que el día 9 de Febrero del presente año, radicó ante la entidad Secretaría de Tránsito y Transporte de Agustín Codazzi, Cesar, Derecho de Petición, para que, oficiosamente declarase la nulidad de la sanción que le fue impuesta con ocasión de una Infracción de Tránsito según Orden de Comparendo No. 20013000000022154916 de fecha 28/09/2018, y consecencialmente se actualizarán las bases de datos correspondientes de Simit y Runt, así como todas aquellas donde aparece como deudor de estas sanciones.
- Que solicitó las guías de envío y el pantallazo del RUNT, concretamente solicitó copia del recibido de la guía de correo certificado donde constara que le notificaron dentro del término legal, copia del comparendo en mención, así mismo solicitó copia del acta de posesión, cargo y manual de funciones y del documento de identidad del funcionario(a) que firmó dichos documentos, donde demuestre la idoneidad para

ejerger dicha función, que por cierto quien la ejerza deberá acreditar pertenecer a la planta de personal de nómina y ser de carrera administrativa además Solicito prueba de la citación para notificación personal y la notificación por aviso del comparendo mencionado en el punto 1.

- Que igualmente requirió los permisos solicitados ante la SuperTransporte, prueba de la debida señalización y de calibración de las cámaras de fotodetección con la cual realizaron la fotodetección que aparece a su nombre en la plataforma Simit y que aparecen en el estado de cuenta adjunto al presente documento, tal como lo establece la ley 1843 del año 2017 y la Resolución 718 del año 2018. Además solicitó decretar la nulidad de dicho comparendo, ya que la cámara no cuenta con la autorización que exige el Ministerio de Transporte para la puesta en marcha, operación e instalación de la cámara de foto detección, tal como lo indica el artículo 2 de la ley 1843 de 2017 también Copia autenticada y firmada por la autoridad de tránsito competente del estudio de accidentalidad, flujo vehicular y peatonal, geometría, ubicación, calibración y tipo de equipos que motivó y justificó la puesta en marcha y operación de esa cámara de foto detección en ese lugar en específico, tal como lo establece el artículo 13 de la ley 1843 de 2017 seguidamente pidió el certificado de calibración vigente expedido por el Instituto Nacional de Metrología de los equipos de foto detección utilizados para realizar las infracciones, tal como lo exige la ley 1843 de 2017 en su artículo 14.
- Que La Secretaría de Tránsito y Transporte de Agustín Codazzi, Cesar, el día Miércoles 10 de Febrero del presente año dio respuesta a su solicitud, respuesta que en su opinión personal no fue de fondo, ya que analizando punto a punto su respuesta se denota una mala interpretación de la norma, principalmente en el punto No 1, ya que manifiesta lo siguiente: "Frente a la manifestación de que no existen pruebas contundentes para demostrar quién iba conduciendo el vehículo, nos permitimos indicar que una vez verificada la información inscrita en el Registro Único Nacional de Tránsito -Runt-, se pudo evidenciar que el vehículo identificado con número de placas QGQ-668, registra como de su propiedad, es por tal razón que las ordenes de comparendo fueron cargadas a su nombre".
- Que respecto a la segunda petición [elevada] a la Secretaría de Tránsito y Transportes de Agustín Codazzi - Cesar, correspondiente a la notificación del comparendo, estos le envían copia de una guía de Servientrega donde manifiesta "Teniendo en cuenta que el envío de la orden de comparendo **No. 20013000000022154916** fue devuelto al remitente, según la constancia emitida por la empresa de correos Servientrega, a través de la guía No. 2020337282, por lo tanto la notificación personal no fue posible, este organismo de tránsito procedió a la notificación por aviso, en virtud de lo consagrado en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011(...)", pudiéndose ver que la fecha de envío es el 30 de Octubre de 2018, por lo que si nos vamos a lo establecido en el artículo 8 de la ley 1843 de 2017, se pude concluir que el trámite debió ser culminado a mas tardar el día 18 de Octubre de 2018, a partir del día siguiente el comparendo no tenía validez. .
- Que respecto a las demás solicitudes, tales como el permiso que deben tramitar ante el ministerio de transporte para la puesta en marcha de las cámaras de fotocomparendos le contestaron lo siguiente: "Basándonos en la normativa anteriormente citada; informamos que si bien, se necesita autorización por parte del Ministerio, no es menos cierto que, frente a la instalación de los Sats, de acuerdo a la Resolución 718 de 2018 se dispuso el termino de 180 días para tramitar la referida autorización, el cual culminó el 17 de diciembre de 2018, es decir, todos los comparendos electrónicos impuestos con antelación a dicha fecha, son legales."
- Por último el accionante depreca se ampare el derecho fundamental al debido proceso, y a la igualdad y cualquier otro del mismo rango que se determine como violado. Se ordene al accionado(a) que una vez se produzca la decisión definitiva en el asunto en cuestión, remita a este despacho copia del acto administrativo con las formalidades de ley o que, consultado en el Simit, esté dado de baja el comparendo en cuestión, ordene al señor Secretario de Tránsito y Transporte de Agustín Codazzi - Cesar, quien lo sea o quien haga sus veces, al momento de la notificación, se sirva

hacer efectivo el descargue de la plataforma SIMIT el comparendo anteriormente mencionado, ordene a la Secretaría de Transito y Transportes de Agustín Codazzi - cesar, quien lo sea o quien haga sus veces, contestar mi derecho fundamental de petición de fondo.

Fueron acompañados como pruebas por parte del accionante, las siguientes: **a).** -- Copia del envío vía correo electrónico del derecho de petición a la Secretaria de Transito y Transportes de Agustín Codazzi- Cesar, **b).** copia del derecho de petición. **c).** Copia del estado de cuenta Simit **d).** Copia de la respuesta suministrada por Secretaria de Transito y Transportes de Agustín Codazzi- Cesar.

Por venir en legal forma la solicitud fue admitida mediante auto adiado 15 de Febrero del cursante año, requiriéndose a la entidad accionada SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE AGUSTÍN CODAZZI, CESAR y al vinculado, MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI CESAR, para que en el término de dos (2) días contados a partir de la fecha de la notificación del auto admisorio, se sirvieran rendir un informe sobre los hechos planteados por la peticionaria, observándose que la accionada emitió respuesta a través de la Señora KATTERYN E. PARADA CASTRELLÓN, mientras que el municipio vinculado, guardó absoluto silencio.

CONTESTACIÓN DE LA ACCIONADA LA SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE AGUSTÍN CODAZZI – CESAR.

La señora KATTERYN E. PARADA CASTRELLÓN, en su aludida calidad de Secretaria de Tránsito y Transporte de esta municipalidad, mediante memorial enviado al correo electrónico del despacho, admite como ciertos los hechos consagrados en los puntos 1, 3, 4, 5, 6, 7, parcialmente el numero 2 y niega los hechos contemplados en los puntos 8, 9 y 10.

Aclara que el accionante solicitó copia de la guía de envío y así mismo le fue enviado. Agrega que por otra parte, los términos a los que él se refiere son errados, como consta en la guía de notificación personal. En lo concerniente al permiso o autorización al que hace mención en su escrito, se hace necesario traer a colación el Artículo 2 de la Ley 1843 del 2017, en conexidad con el parágrafo 1 del Artículo 7, de la Resolución 718 del 2018. Mas adelante asegura que el derecho de petición fue contestado de fondo, oportuno y congruente. En cuanto a la mala interpretación de la norma según el accionante frente a la sentencia C-038 de 2020, tal como se le expresó en la respuesta, esta es de fácil interpretación:

"Parágrafo 1º. El propietario del vehículo será solidariamente responsable con el conductor, previa su vinculación al proceso contravencional, a través de la notificación del comparendo en los términos previstos en el presente artículo, permitiendo que ejerza su derecho de defensa".

En forma ulterior precisa, que si bien ese aparte de la norma fue declarado inexecutable a través de Sentencia C-038 de 2020 proferida por la Corte Constitucional, el mismo se encontraba vigente en el momento de la comisión de la infracción y fue por ello que se aplicó para su caso en concreto. Si bien El efecto de la decisión de la Corte es que, de ahora en adelante (no es retroactiva), las autoridades no podrán imponer una multa sobre las placas de los vehículos, sino que las cámaras deben identificar de manera precisa quién era el que iba conduciendo y, por lo tanto, quién fue el que cometió la infracción. Pero de lo que trata la irretroactividad de la sentencia es que tendrá efectos ex nunc, es decir tiene vigencia desde el momento en que se dicta, el 9 punto no es cierto que haya sido notificado el día 30 de octubre de 2018, como consta en la guía No. 2020337282, de la notificación personal donde claramente se evidencia fecha 22 de octubre de 2018, Con relación a la solicitud de copia del acta de nombramiento del agente que realizó la validación tal como se le fue manifestado en la respuesta de derecho de petición, le permitieron indicarle que no son la dependencia competente para suministrar dicha información ya que la documentación exigida reporta en los archivos de recursos humano de la alcaldía por tanto se le debe solicitar formalmente, consecuente a esto, no están dilatando el presente proceso, el 10 punto no es cierto, tal como se le manifestó en la respuesta de derecho de petición, en lo concerniente al permiso o autorización al que hace mención en su escrito, se

hace necesario traer a colación el Artículo 2 de la Ley 1843 del 2017, en conexidad con el párrafo 1 del Artículo 7, de la Resolución 718 del 2018, por último reiteraron lo expuesto en la respuesta de derecho de petición que todos esos documentos, estudios, permisos, etc... solicitados, hacen parte de la documentación exigida por el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial requerida a través de la Resolución 718 de fecha 22 de marzo de 2018, misma en la que se establecen los criterios técnicos para la instalación y operación de medios técnicos o tecnológicos para la detección de presuntas infracciones al tránsito y se dictan otras disposiciones.

Por último la entidad accionada manifiesta que se Declare que la Secretaria de Tránsito y Transporte de Agustín Codazzi-cesar no ha vulnerado los derechos fundamentales que se endilgaron violados por el accionante, por consiguiente, se declare la improcedencia de la presente acción de tutela conforme a las consideraciones y fundamentos de ley del presente escrito y en consecuencia se ordene el archivo del expediente.

Una vez enunciados los antecedentes del caso y habiendo sido relacionado el acervo probatorio acopiado, procederemos a adoptar la decisión de fondo que en estricto derecho corresponda, previas las siguientes...

CONSIDERACIONES

1. _ Competencia

Para el Juzgado es claro que la competencia para conocer de la presente Acción de Tutela, recae en este despacho al tenor del artículo 37 del Decreto – ley 2591 de 1991 y del Decreto 1382 de 2000.

2. _ Legitimidad de las Partes

La accionante, GERMAN DAVID RAMÍREZ ZULETA, por ser la persona afectada con las presuntas acciones y omisiones de las entidades demandadas, se encuentra legitimado para incoar la presente acción de amparo. Así mismo, la SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE AGUSTÍN CODAZZI- CESAR y EL MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI - CESAR, por ser la primera la entidad a la cual el accionante le atribuye los actos que presuntamente vulneran sus derechos fundamentales cuyo amparo es deprecado, y la segunda por haber sido vinculada a esta actuación, reúnen los presupuestos de legitimidad para comparecer en calidad de accionadas, dentro de este trámite tutelar.

3. _ Problemas jurídicos y esquema de resolución

De acuerdo con la situación fáctica planteada corresponde a este despacho determinar los siguientes aspectos: *i).* _ La procedencia de la acción; y, *ii).* _ De ser procedente la acción, establecer si la entidad accionada SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL DE AGUSTÍN CODAZZI- CESAR, por presuntamente no haberle brindado una respuesta de fondo a la solicitud presentada en virtud del derecho de petición, por la señora GERMAN DAVID RAMÍREZ ZULETA, y por no haber accedido a descargar del SIMIT el comparendo sancionatorio por una infracción de tránsito, vulnera los derechos fundamentales cuyo amparo es deprecado, y de ser así, adoptar las medidas de protección pertinentes, o si nos encontramos ante la figura denominada "hecho superado".

Para resolver los problemas jurídicos planteados, este despacho procederá de la siguiente manera: **1).** _ Se determinará la procedencia de la acción. **2).** _ Se referirá a los derechos fundamentales cuya protección se impetran Derecho de Petición, Debido Proceso y se traerá como referencia la Ley 1755 de 2015, respecto al término para emitir respuesta a las peticiones, **3).** _ Se hará alusión al fenómeno denominado "hecho superado"; **4).** _ Se abordará el caso en concreto.

3.1._ Procedencia

Respecto a la procedencia de la acción de tutela es dable aclarar que ésta al ser elevada a precepto constitucional por el Constituyente de 1991, ha sido concebida como un medio de defensa, ágil, eficaz, preferente, residual y sumario de los derechos fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública y en algunos casos por los particulares cuando estos se encuentren en alguna de las siguientes condiciones: a). _ Cuando cumplan funciones públicas o que estén encargadas

de la prestación de un servicio público. b)._ Cuando sus acciones u omisiones afecten grave y directamente el interés colectivo; y c)._ Cuando el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión respecto al particular.

En razón de lo anterior Nuestra Carta Política en su artículo 86 dispone:

"Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública".

Se le quiso dar a esta herramienta constitucional un efecto inmediato y subsidiario al limitar su procedencia a la inexistencia de otro medio de defensa judicial de igual eficacia para la protección del derecho, o que, habiéndolo, esta se utilice como mecanismo de carácter transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Quiere lo anterior significar que la acción de tutela es un mecanismo judicial de protección de los derechos fundamentales que procede *i)* cuando el afectado no dispone de otro instrumento para su restablecimiento, *ii)* en caso de que el previsto no resulte eficaz, en consideración a la situación particular que afronta el actor y *iii)* siempre que la intervención transitoria del juez de amparo resulte necesaria, para evitar o al menos mitigar un perjuicio irremediable.

En el caso bajo estudio el Despacho observa que en lo que atañe a la solicitud encaminada a obtener de la entidad querellada el descargue de la plataforma SIMIT del comparendo al que se contrae esta tutela, lo que comporta la declaratoria de nulidad de la sanción impuesta, corresponde a la jurisdicción contencioso administrativa resolver la controversia planteada, sin que le sea dado al juez constitucional reemplazar al juzgador natural, por lo que, en este aspecto, la acción constitucional resulta improcedente, por lo tanto solo abordará este despacho lo atinente a la resolución del derecho de petición incoado por el actor.

3.2. Derechos Fundamentales cuya protección se invoca

3.2.1. Derecho de Petición. _

En este orden de ideas cabe señalar que el Derecho de Petición es de aquellos que por su naturaleza de Constitucionales y Fundamentales admiten su protección a través de la vía expedita y sumaria de la Acción de Tutela. Consagra el artículo 23 Superior:

"Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución.".

Ahora bien, para que no se torne inocuo el derecho fundamental de petición, se requiere no solo que el peticionario tenga la facultad de presentar la solicitud, sino, que esta sea resuelta en forma rápida, oportuna y de fondo. No basta entonces que el encargado de resolver la petición, se limite a generar una respuesta somera o superficial sobre el asunto objeto del derecho que se impetra. Se hace necesario también que se le dé una resolución a la situación planteada dentro de la solicitud y que el interesado reciba de manera real y efectiva la solución brindada, siendo indispensable que esa resolución se ponga en conocimiento de los interesados a través de un medio que asegure su eficacia.

Sobre el particular nos ilustra la sentencia T-181 de 1993 con ponencia del Magistrado Hernando Herrera Vergara, en los siguientes términos:

"(...) Puede afirmarse que el derecho fundamental sería inocuo si solo se formulara en términos de poder presentar la respectiva petición. Lo que hace efectivo el derecho es que la petición elevada sea resuelta rápidamente. De nada serviría el Derecho de Petición, si la misma Constitución no consagrara el correlativo deber de las autoridades de proferir pronta resolución (...)"

Más adelante, en Sentencia a T-558 de 2012, dijo:

"(...) El derecho de petición, como institución jurídica, encuentra su razón de ser en la necesidad de regular las relaciones entre las autoridades y los particulares, con el fin de que estos últimos puedan conocer y estar al tanto de las actuaciones de cualquier ente

estatal. Desde este punto de vista, su núcleo esencial está en la pronta respuesta que se le brinde a las solicitudes presentadas.

Por su parte, la jurisprudencia constitucional ha señalado la relevancia que cobra el derecho fundamental de petición, ya que se constituye en un instrumento clave para el funcionamiento de la democracia participativa, y para el acceso a derechos como el de información y libertad de expresión, entre otros.

En ese orden de ideas, la Corte ha manifestado, a su vez, que el derecho de petición no solo implica la posibilidad de presentar solicitudes a las autoridades estatales o a entes particulares, cuando la ley lo permita, sino, de igual manera, que se de una oportuna respuesta con sujeción a los requerimientos establecidos en la ley para dicha petición. Es decir, independientemente de que lo resuelto por la entidad sea adverso o no a los intereses del peticionario, la resolución del asunto debe contar con un estudio minucioso de lo pretendido, argumentos claros, que sea coherente, dé solución a lo que se plantea de manera precisa, suficiente, efectiva y sin evasivas de ninguna clase. Sobre el particular ha sostenido la Corporación que:

"... una respuesta es suficiente cuando resuelve materialmente la petición y satisface los requerimientos del solicitante, sin perjuicio de que la respuesta sea negativa a las pretensiones del peticionario; es efectiva si la respuesta soluciona el caso que se plantea (artículos 2, 86 y 209 de la C.P.); y es congruente si existe coherencia entre lo respondido y lo pedido, de tal manera que la solución a lo pedido verse sobre lo preguntado y no sobre un tema semejante o relativo al asunto principal de la petición, sin que se excluya la posibilidad de suministrar información adicional que se encuentre relacionada con la petición propuesta"

"(...) Así, para tener claridad sobre los elementos del derecho de petición, esta Corporación ha indicado que el mismo se compone de:

1. La posibilidad cierta y efectiva de elevar, en términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas.
2. La obtención de una respuesta que tenga las siguientes características:
 - (i) Que sea oportuna;
 - (ii) Que resuelva de fondo, en forma clara y precisa lo solicitado; lo cual supone que la autoridad competente se pronuncie sobre la materia propia de la solicitud de manera completa, sin evasivas respecto a todos y cada uno de los asuntos planteados.
 - (iii) Que la respuesta sea puesta en conocimiento del peticionario.
3. La respuesta es independiente del hecho de si es favorable o no, pues no necesariamente dar una respuesta de fondo implica acceder a lo pedido.

"(...) Bajo ese entendido, para que la respuesta a la petición se encuentre ajustada a la ley y a lo que la jurisprudencia constitucional ha manifestado al respecto, la misma, además de ser oportuna y de fondo como ya se mencionó, debe ser comunicada al peticionario. (Subrayas y negrillas ajenas al texto original).

De igual manera, por tratarse de un derecho con categoría fundamental, es susceptible de ser protegido a través de la acción de tutela. No obstante, para que el amparo proceda, no basta con afirmar que se elevó una petición, sino que debe haber prueba, siquiera sumaria, de la misma, es decir, que se cuente con algún tipo de herramienta que permita respaldar la afirmación, y por su parte, es la autoridad la que debe demostrar que dio respuesta oportuna, clara y de fondo a la solicitud (...).

En ocasión ulterior, en Sentencia T-801/12, dispuso:

"(...) En relación con su contenido y alcance, la Corte ha explicado que: i) es determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia; ii) su contenido esencial comprende: a) la posibilidad cierta y efectiva de elevar, en términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas; b) la respuesta oportuna dentro de los términos establecidos en el ordenamiento jurídico; c) la respuesta de fondo o contestación material, lo que supone que la autoridad entre en el fondo de la materia propia de la solicitud, sobre la base de su competencia, refiriéndose de manera completa a todos los asuntos planteados (plena correspondencia entre la petición y la respuesta), excluyendo

fórmulas evasivas o elusivas; y d) la pronta comunicación de lo decidido al peticionario, con independencia de que su sentido sea positivo o negativo (...)..

3.2.2. _ Ley 1755 de 2015 (Reglamentación al Derecho de Petición).

Procedente es analizar lo establecido en el artículo 14 de la Ley 1755 de 2015 respecto de los términos para responder los derechos de petición, el cual menciona:

“Artículo 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones:

1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes.
2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.

Parágrafo. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado en la ley expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto.”

3.2.3. _ Debido Proceso.

En este orden de ideas cabe señalar que el Derecho al Debido Proceso, por constituir una prerrogativa que tiene arraigo en Nuestra Carta Fundamental, y no solamente en su artículo 29, que consagra de manera clara y precisa la imperatividad de darle aplicación en todas las actuaciones judiciales y administrativas, sino que además, se encuentra implícita en una gran parte de la normatividad que regenta otras garantías de orden constitucional y legal tales como el Derecho a la defensa, contradicción, juez natural, presunción de inocencia, libre acceso a la justicia, la cosa juzgada, entre otros, es de aquellas garantías que admiten su protección a través de este medio expedito, residual, sumario y eficaz.

La doctrina constitucional define el debido proceso como: *“Todo ese conjunto de garantías que protegen al ciudadano sometido a cualquier proceso, que le aseguren a lo largo del mismo una recta y cumplida administración de justicia, al igual que la libertad, la seguridad jurídica y la fundamentación de las resoluciones judiciales y de las decisiones que le puedan afectar, proferidas conforme a derecho*

Así pues, el derecho al Debido Proceso puede concebirse como aquel que *“...tiene toda persona a que se cumpla en el proceso en que se vea involucrada, judicial o administrativo, todas las formalidades que indica la ley y la forma como las señala...”*. Este precepto alberga garantías de todo orden, procesales, sustantivas, sancionatorias, las cuales deben respetarse en toda clase de proceso y a los que debe dársele aplicación sin dilación alguna; y como integrante del mismo el derecho a la defensa y contradicción.

De esa manera, el artículo 29 de la Carta, por expresa voluntad del Constituyente de 1991, plasmada en su mismo texto, es de obligatoria e ineludible observancia en toda clase de actuaciones tanto judiciales como administrativas, de tal modo que, ante la meridiana claridad del precepto, ninguna autoridad dentro del Estado está en capacidad de adoptar decisiones de carácter particular encaminadas a afectar en concreto a una o varias personas en sus derechos y garantías de orden constitucional y/o legal, o en sus actividades, si previamente no se ha adelantado un proceso en cuyo desarrollo se haya brindado a los sujetos pasivos de la determinación, la plenitud de las garantías que el enunciado artículo incorpora.

El derecho al debido proceso comprende no sólo la observancia de los pasos que la ley impone a los procesos judiciales y a los procesos y trámites administrativos, sino también, el respeto a las formalidades propias de cada juicio, que se encuentran, en general,

contenidas en los principios que los inspiran, el tipo de intereses en litigio, las calidades de los jueces y funcionarios encargados de resolver. De la misma manera, la obligación de resolver de manera pronta y ajustada a derecho las solicitudes que se eleven, hace parte de este precepto universal conocido como el debido proceso.

3.3_ Hecho superado.

La Corte Constitucional ha sido reiterativa en aclarar que una vez superada la situación de hecho que generó la vulneración o la amenaza del derecho fundamental, la acción de amparo perdería su eficacia tomándose improcedente e inoqua.

Sobre el particular, en sentencia T-167 de 1.997, nos ilustra:

"(...) El objetivo fundamental de la acción de tutela es la protección efectiva e inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, en aquellos casos en que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión o de una autoridad pública o de un particular en los términos en que establece la constitución y la ley. Obsérvese que la eficacia de esta acción se manifiesta en la posibilidad que tiene el juez constitucional si encuentra probada la vulneración o amenaza alegada, de impartir una orden encaminada a la defensa actual e inminente del derecho en disputa. Pero si la situación de hecho que generó la violación o la amenaza ya ha sido superada, el mandato que pueda proferir el juez en defensa de los derechos fundamentales conculcados, ningún efecto podría tener, el proceso carecería de objeto y la tutela resultaría improcedente; en otras palabras, la acción de tutela perdería su razón de ser (...)"

En Sentencia T-013 de 2017, reiteró:

"(...) El hecho superado se presenta cuando, por la acción u omisión (según sea el requerimiento del actor en la tutela) del obligado, se supera la afectación de tal manera que "carece" de objeto el pronunciamiento del juez. La jurisprudencia de la Corte ha comprendido la expresión hecho superado en el sentido obvio de las palabras que componen la expresión, es decir, dentro del contexto de la satisfacción de lo pedido en tutela. Es decir, el hecho superado significa la observancia de las pretensiones del accionante a partir de una conducta desplegada por el agente transgresor. El daño consumado tiene lugar cuando "la amenaza o la vulneración del derecho fundamental han producido el perjuicio que se pretendía evitar con la acción de tutela. La configuración de este supuesto ha sido declarada por la Corte, por ejemplo, en los casos en que el solicitante de un tratamiento médico fallece durante el trámite de la acción como consecuencia del obrar negligente de su E.P.S., o cuando quien invocaba el derecho a la vivienda digna fue desalojado en el curso del proceso del inmueble que habitaba (...)"

3.4._ El caso concreto.

En el evento que nos ocupa, del caudal probatorio compendiado especialmente de lo manifestado en la solicitud por parte del accionante puede inferirse sin hesitación alguna, que la situación planteada consiste en que el señor GERMAN DAVID RAMÍREZ ZULETA, reclama ante esta judicatura se ordene al ente accionado resolver de fondo su solicitud elevada en ejercicio de petición el día 9 de Febrero del cursante año, donde depreca de esta, lo siguiente: 1._ La exoneración del Comparendo No. 20013000000022154916, que aparece en el estado de cuenta SU¿IMIT. 2._ Las guías de envío y el pantallazo del RUNT, concretamente copia del recibió de la guía de correo certificado, donde conste que le notificaron dentro del término legal. Copia del comparendo en mención, así mismo copia del acta de posesión, cargo y manual de funciones y del documento de identidad del funcionario(a) que firmó dichos documentos, donde demuestre la idoneidad para ejercer dicha función, Solicitó prueba de la citación para notificación personal y la notificación por aviso del comparendo. 3._ Que igualmente requirió los permisos solicitados ante la SuperTransporte, prueba de la debida señalización y de calibración de las cámaras de fotodetección con la cual realizaron la fotodetección que aparece a su nombre en la plataforma Simit y que aparecen en el estado de cuenta adjunto al presente documento, tal como lo establece la ley 1843 del año 2017 y la Resolución 718 del año 2018. Además solicitó decretar la nulidad de dicho comparendo, ya que la cámara no cuenta con la autorización que exige el Ministerio de Transporte para la puesta en marcha, operación e instalación de la cámara de foto detección, tal como lo indica el artículo 2 de la ley 1843 de 2017 también Copia autenticada y firmada por la autoridad de tránsito competente del estudio de accidentalidad, flujo vehicular y peatonal, geometría, ubicación, calibración y tipo de equipos que motivó y justificó la puesta en marcha y operación de esa cámara de foto detección en ese lugar en

REF: Acción de tutela promovida por GERMÁN DAVID RAMÍREZ ZULETA en contra de LA SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE AGUSTÍN CODAZZI, CESAR Y EL MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI, CESAR RAD. 200134089001-2021-00028-00.

específico, tal como lo establece el artículo 13 de la ley 1843 de 2017 seguidamente pidió el certificado de calibración vigente expedido por el Instituto Nacional de Metrología de los equipos de foto detección utilizados para realizar las infracciones, tal como lo exige la ley 1843 de 2017 en su artículo 14.

Ahora bien, la Secretaria de Tránsito y Transporte de este Municipio, al descorrer el traslado de la solicitud, aduce haberle dado respuesta a las peticiones elevadas por el actor, aseveración que el despacho advierte se encuentra confirmada por el mismo accionante, tal como se desprende de lo manifestado en el punto Octavo del acápite de los hechos de la solicitud, a pesar de no haber sido de su agrado la respuesta obtenida, sin embargo, cabe resaltar que la carga impuesta por la constitución y la ley al destinatario de la petición, consiste en darle respuesta oportuna y de fondo a lo peticionado, sin que ello implique el imperativo de resolver en uno u otro sentido. En este evento aflora dentro de esta actuación, que la funcionaria a cargo de la entidad querellado, brindó una respuesta a cada uno de los interrogantes plantados por el petente, haciéndole entrega de la documentación requerida y de la cual dispusiera, refiriéndose a todos los aspectos planteados, explicándosele en algunos eventos las razones por las que no era posible la entrega de algunos documentos e igualmente porque no era posible atender algunos requerimientos, tal como se plasma en el punto 9 de la contestación de la presente solicitud de tutela, donde se explica que el acta de nombramiento del agente que realizó la validación no reposa en esa dependencia. .

Así las cosas, salta a la vista que con lo antes establecido podemos concluir que, en lo que atañe a la respuesta de la solicitud elevada, nos encontramos ante el fenómeno denominado "hecho superado", y carencia actual de objeto, que no es otro que, habiéndose presentado la tutela y existiendo vulneración a los derechos deprecados, dicha conculcación fenece, resultando de ello la configuración del mencionado fenómeno, mientras que en lo concerniente a la petición encaminada a obtener de la accionada la declaratoria de nulidad del comparendo acusado y consecuentemente obtener de la entidad querellada el descargue de la plataforma SIMIT del comparendo al que se contrae esta tutela, tal como se indicó en el estudio de procedibilidad, corresponde a la jurisdicción contencioso administrativa resolver la controversia planteada.

Emana entonces, de todo lo anterior, que en efecto, ya fue ejecutado lo pretendido por la interesada a través del presente instrumento, es decir, se emitiera respuesta a su petición, actuación que – se itera - ya fue realizada por el ente accionado, por lo que habiendo sido superada la situación fáctica que diera origen a la interposición de esta solicitud tutelar, es claro entonces que nos encontramos ante el fenómeno denominado "hecho superado", haciendo inocuo entonces cualquier orden que pudiera emitirse al respecto, por lo que no será concedido el amparo deprecado.

En mérito de lo antes expuesto el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Agustín Codazzi-Cesar, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

Primero. _ **Denegar** el Amparo Tutelar solicitado por el señor GERMAN DAVID RAMIREZ ZULETA, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

Segundo. _ Notifíquese este fallo a las partes intervinientes, por el medio más expedito (art. 16 del decreto 2591 de 1991).

Tercero. _ Contra esta decisión procede el recurso de impugnación. Si no fuere impugnado este fallo dentro de los tres (3) días siguientes al de su notificación, envíese a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión Por el medio más eficaz notifíquese a los interesados.-

CÓPIESE, NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE.

ALGEMIRO DIAZ MAYA
Juez